



Consejo de
Transparencia y
Buen Gobierno

PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN

N/REF: RT 0187/2017

FECHA: 23 de junio de 2017

ASUNTO: Resolución de Reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno

En respuesta a la reclamación número RT/0187/2017 presentada por [REDACTED], el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, considerando los antecedentes y fundamentos jurídicos que se especifican a continuación, adopta la siguiente **RESOLUCIÓN**:

I. ANTECEDENTES

1. Mediante escrito de 17 de abril de 2017 dirigido a la Universidad Autónoma de Madrid, el ahora reclamante presentó, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno - desde ahora, LTAIBG- la siguiente solicitud de acceso a la información:

PRIMERA. NORMATIVA SANCIONADORA DE LA UNIVERSIDAD

En el ámbito sancionador universitario encontramos dos normas donde se contienen las infracciones que pueden cometer estudiantes y profesores universitarios y las sanciones que por éstas se les pueden imponer. Por un lado, el Reglamento de Disciplina Académica de 1954, para los estudiantes; y por otro, Real Decreto 33/1986 de 10 de enero, para los profesores.

Es común que en los Estatutos propios de cada Universidad éstas se comprometan a aprobar su propia normativa sancionadora, a esta razón, ¿ha aprobado la Universidad normativa propia o aplican las normas anteriormente citadas?

En caso afirmativo, se solicita que la aporten junto con la resolución de esta solicitud.

SEGUNDA. NORMATIVA SANCIONADORA DE SUS CENTROS

¿Tiene la Universidad o alguno de sus centros normativa sancionadora específica? P.ej. La Universidad Alfonso X El Sabio tiene normativa propia para las facultades de

ctbg@consejodetransparencia.es



Odontología y Veterinaria, donde por la naturaleza de sus planes de estudio, se prevén infracciones especiales.

En caso afirmativo, se solicita que la aporten.

TERCERA. APLICACIÓN DE LA NORMATIVA ESTATAL

Se solicita la relación de expedientes -sin datos de carácter personal o identificativos- en los que entre enero de 2014 -incluido- y a fecha de abril de 2017, se haya aplicado el Reglamento de Disciplina Académica de 1954, el Real Decreto 33/1986 o, en su caso, la normativa sancionadora específica de la Universidad o de alguno de sus centros.

CUARTA. MECANISMOS DE PREVENCIÓN

¿Tiene la Universidad o alguno de sus centros algún tipo de normativa, circulares, protocolos de actuación o planes de prevención del bullying o del mobbing, del plagio, de la violencia de género o en el ámbito universitario?

En caso afirmativo, se solicita que los aporten.

En caso negativo, se solicita que se indique si están en proceso de elaboración.

QUINTA. REALIZACIÓN DE EXÁMENES

¿Cuenta la Universidad o alguno de sus centros con normas o protocolos específicos para controlar el fraude en la realización de los exámenes? Esto es, indicaciones de cómo deben colocarse los alumnos, qué material pueden llevar y que no, si pudieren salir durante la prueba, si cierran la comunicación mediante inhibidores, etc.

En caso afirmativo, se solicita que los aporten.

¿De alguna manera advierten a los alumnos de las consecuencias que tiene el hecho de copiar en un examen o comunicarse durante el mismo?

En caso afirmativo, se solicita que aporten el protocolo o el documento donde se recojan estas advertencias.

¿Cuenta la Universidad o alguno de sus centros con normas reguladoras de las medidas que hay que adoptar en caso de advertir conductas fraudulentas durante la realización de los exámenes?

En caso afirmativo, se solicita que aporten dicha normativa.

¿Qué consecuencias tiene en su Universidad el hecho de que un alumno sea sorprendido copiando en un examen? ¿Se le considera automáticamente suspendido o se le da la posibilidad de repetir el examen? ¿Se le apertura, con carácter general, procedimiento sancionador?

SEXTA. SERVICIO DE INSPECCIÓN

Según el art. 16 del Real Decreto 898/1985, las Universidades deben constituir un Servicio de Inspección, ¿cuenta la Universidad o alguna de sus Facultades con este Servicio? En caso afirmativo, se solicita que aporten los estatutos o reglamento del mismo.

SÉPTIMA. NÚMERO DE PROCEDIMIENTO INICIADOS



Se solicita una relación de todos los procedimientos que se han iniciado desde enero de 2014 hasta abril de 2017, diferenciando entre estudiantes y profesores.

De todos estos, indíquese cuáles fueron aperturados a iniciativa del Servicio de Inspección y cuántos por denuncia.

OCTAVA. NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS RESUELTOS

Se solicita una relación de todos los procedimientos que se han resuelto desde enero de 2014 hasta abril de 2017, diferenciándose entre aquéllos en que fueron sancionados estudiantes y profesores.

Se solicita una relación de los procedimientos que en el período de referencia han terminado en absolución por falta de prueba.

De la misma manera, se solicita otra relación de aquéllos procedimientos que hayan acabado en absolución por falta de tipicidad de la conducta; esto es, porque no esté expresamente recogida en las normas sancionadoras la conducta realizada.

En ambos casos, se pide también que se diferencie entre estudiantes y profesores.

NOVENA. RÉGIMEN DE RECURSOS Y JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

Se solicita una relación de las resoluciones -nuevamente, un indicativo del que no pueda extraerse dato de carácter personal o identificativo alguno y en el período de referencia- de las resoluciones que han sido recurridas en reposición, diferenciando entre profesores y alumnos.

De la misma manera, se solicita la relación de cuántas lo han sido a la jurisdicción contencioso-administrativa. Asimismo, en caso de que tengan sentencias que afecten a su Universidad, se solicita que nos las faciliten o, en su defecto, nos relacionen los datos identificativos de las mismas.

DÉCIMA. NÚMERO DE INFRACCIONES

Se solicita que nos indiquen el número de infracciones de cada tipo han sido detectadas desde enero de 2014 -incluido- hasta abril de 2017. Por un lado, las contempladas en el Decreto de 8 de septiembre de 1954; y por otro lado, las contempladas en el Real Decreto 33/1986 de 10 de enero.

Por ejemplo: "Del art. 7.1.b) del RD 33/1986, El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo: 3" En su defecto, indiquen en cada referencia de expediente, el tipo de infracción de que se trate.

DÉCIMA-PRIMERA. EJECUCIÓN DE SANCIONES Y MEDIDAS CAUTELARES

Es frecuente en el Derecho sancionador encontrar dificultad para ejecutar determinadas sanciones, ¿se han encontrado dificultades para ejecutar las impuestas en su ámbito sancionador? ¿Cuáles son estas dificultades?

¿Se han dado casos, por ejemplo, en que una vez que se sanciona al alumno prohibiéndole realizar el examen de una determinada asignatura, éste ya la ha aprobado entre tanto se ha instruido el procedimiento? Para esos casos, ¿se prevé o se ha acudido alguna vez a la revisión de oficio para de alguna manera anular ese aprobado y hacer que la sanción se haga efectiva? ¿Cómo se desarrolló este procedimiento?



¿Controlan de alguna manera o tienen mecanismos que impidan un estudiante se matricule en su Universidad aun habiendo sido sancionado por otra con la inhabilitación temporal o perpetua de los Centros docentes -art. 6.a) del Decreto de 8 de septiembre de 1954-.? En caso afirmativo, se solicita que indiquen en qué consisten estos mecanismos.

¿Imponen medidas cautelares? En caso afirmativo, indíquese en qué consisten.

¿De qué forma ejecutan en su Universidad las sanciones de amonestación pública? ¿y las privadas?

¿Se prevé de alguna manera la difusión de las sanciones impuestas con objeto de concienciar y advertir al resto de los alumnos y profesores? En caso afirmativo, se solicita que indiquen de qué forma.

DÉCIMA-SEGUNDA. RELACIONES SUJETAS AL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES

Se solicita una relación de los contratos de tipo laboral que han terminado mediante despido disciplinario desde enero de 2014 -incluido- hasta abril de 2017.

DÉCIMA-TERCERA. PREJUDICIALIDAD PENAL

Se solicita una relación de los procedimientos que han quedado en suspenso a la espera de que la jurisdicción penal se pronuncie sobre los mismos; o que bien, aún estando en curso el procedimiento o habiendo sido ya resuelto, se ha dado traslado también a esta jurisdicción. Se solicita que se indique diferenciando entre profesores y alumnos y desde enero de 2014 -incluido- a abril de 2017.

DÉCIMA-CUARTA. MEDIACIÓN

¿En alguno de los procedimientos analizados se acudió a la institución de la mediación? En caso afirmativo, indiquen en qué consistió esta mediación y si la misma resultó efectiva.

Transcurrido el plazo de un mes previsto en el artículo 24.2 de la LTAIBG sin haber recibido contestación a su solicitud de acceso a la información, el interesado la entiende desestimada por silencio administrativo y, en consecuencia, por escrito registrado en esta Institución el 9 de junio interpone Reclamación al amparo del artículo 24 de la LTAIBG.

2. El 12 de junio de 2017, por la Oficina de Reclamaciones de las Administraciones Territoriales de este Consejo se dio traslado del expediente a la Secretaria General de la Universidad Autónoma de Madrid a fin de que, en el plazo de quince días hábiles, formularan las alegaciones que estimasen por conveniente, aportando, asimismo, toda la documentación en la que fundamentar las alegaciones que pudieran realizar.

Mediante escrito de la indicada Secretaria General registrado en esta Institución el 21 de junio de 2017 se da traslado a este Consejo de las alegaciones que se estiman por conveniente. En concreto, su contenido puede sistematizarse como sigue.



- *El interesado aporta una solicitud normalizada de acceso a la información pública, disponible en la sede electrónica de la Universidad Autónoma de Madrid, cumplimentada con sus datos y el objeto de la solicitud. No consta en el sistema ninguna solicitud registrada por dicho interesado por lo que, hechas las comprobaciones oportunas, se concluye que el interesado no culminó el proceso de tramitación y registro de la solicitud a través de la sede electrónica [para lo cual se adjunta copia de Informe Técnico de Solicitud no presentada expediente rec 01-17].*
- *Sentado lo anterior, se concluye que no se ha iniciado procedimiento alguno por lo que procedería inadmitir la reclamación por falta de objeto.*
- *No obstante, en virtud de los principios de transparencia y servicio efectivo al ciudadano, se da traslado de la información solicitada en el ANEXO I que acompaña el escrito de alegaciones.*

En concreto, se traslada la siguiente información:

Cuestión primera

- 1. El régimen disciplinario de los profesores universitarios funcionarios es el establecido en el EBEP, y en lo no previsto el RD 33/1986 de 10 de enero.*
- 2. El régimen disciplinario de los profesores universitarios con vinculación laboral es el establecido en el EBEP, y en lo no previsto, el II Convenio Colectivo del personal laboral de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. Núm. 8, de 10 de enero de 2006).*
- 3. El régimen disciplinario del personal de administración y servicios funcionario es el establecido en el EBEP, y en lo no previsto el RD 33/1986 de 10 de enero.*
- 4. EL régimen disciplinario del personal de administración y servicios con vinculación laboral es el establecido en el EBEP, el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en lo no previsto, el II Convenio del Personal Laboral de Administración y Servicios de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid.*
- 5. El régimen disciplinario de los estudiantes está determinado por el Decreto de 8 de septiembre de 1954 por el que se aprueba el Reglamento de disciplina académica de los Centros oficiales de Enseñanza Superior y de Enseñanza Técnica dependientes del Ministerio de Educación Nacional.*
- 6. La UAM, no ha aprobado otra normativa sancionadora.*

Cuestión segunda

La UAM, no tiene normativa específica

Cuestión tercera

Procedimientos tramitados.

PDI: 4

PAS: 6

Estudiantes: 3

Cuestión cuarta

La UAM ha aprobado el Protocolo por el que se regulan las medidas de prevención y el procedimiento de actuación en casos de acoso moral, sexual y/o por razón de sexo en el trabajo. Este protocolo está disponible en la URL: https://www.uam.es/UAM/24_06-Aprobacion-Protocolo-



[Acoso/1242688993724.htm?pid=1242687531854&title=Aprobaci%C3%B3n%20de%20la%20UAM%20del%20Protocolo%20por%20el%20que%20se%20regulan%20las%20medidas%20de%20prevenci%C3%B3n%20y%20el%20procedimiento%20de%20actuaci%C3%B3n%20en%20casos%20de%20acoso%20moral.%20sexual%20y/o%20por%20raz%C3%B3n%20de%20sexo%20en%20el%20trabajo](https://www.uam.es/UAM/Normativa-Propia-de-la-UAM/1234886368616.htm?language=es&nodepath=Normativa%20Propia%20de%20la%20UAM)

Cuestión quinta

La UAM, no tiene normativa específica en cuanto al control del fraude. Al inicio de los exámenes se advierte esta circunstancia.

La Normativa de evaluación académica de la UAM (aprobada en Consejo de Gobierno de 8 de febrero de 2013) disponible en la [URL:https://www.uam.es/UAM/Normativa-Propia-de-la-](https://www.uam.es/UAM/Normativa-Propia-de-la-UAM/1234886368616.htm?language=es&nodepath=Normativa%20Propia%20de%20la%20UAM)

[UAM/1234886368616.htm?language=es&nodepath=Normativa%20Propia%20de%20la%20UAM](https://www.uam.es/UAM/Normativa-Propia-de-la-UAM/1234886368616.htm?language=es&nodepath=Normativa%20Propia%20de%20la%20UAM) , en sus artículos 1 y 3 regula estas cuestiones.

Cuestión sexta

La UAM cuenta con un Servicio de Inspección. No hay reglamento.

Cuestión séptima

Ya contestada anteriormente.

En la UAM los procedimientos disciplinarios se inician por denuncia.

Cuestión octava

Procedimientos resueltos.

1. Estamento PDI: 3
2. Estamento PAS: 6
3. Estamento Estudiantes:0

Procedimientos por falta de tipicidad de la conducta

1. Estamento Estudiantes:1

Cuestión novena

No disponible.

Cuestión décima

Infracciones estamento PAS

1. Agresiones verbales y físicas
2. Facilitar o consentir la obtención de un beneficio indebido en otros.
3. Incumplimiento horario.
4. Falta de disciplina en el trabajo.
5. Falta de respeto debido a los superiores, compañeros o inferiores
6. Negligencia inexcusable, que ha causado graves daños en la conservación de los locales, al ocasionar daños materiales en los elementos relacionados con el servicio.
7. El abandono del trabajo sin causa justificada.
8. La desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que constituyan infracción manifiesta del Ordenamiento jurídico.
9. La manifiesta insubordinación individual o colectiva.
10. El incumplimiento o abandono de las normas y medidas de seguridad e higiene del trabajo establecidas, cuando de ellos puedan derivarse riesgos para la salud y la integridad física del trabajador o de otros trabajadores.



Infracciones estamento PDI

- 1. Incumplimiento de la Ley de Incompatibilidades*
- 2. La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido para sí o para otro.*

Infracciones estamento Estudiantes

- 1. Incidencias en el desarrollo de prácticas Tuteladas*
- 2. Acceso no autorizado a un ordenador personal de un profesor*

Cuestión décimo primera

La UAM no ha tenido problemas a la hora de ejecutar las sanciones impuestas.

No han existido casos como los aludidos en este apartado.

Las sanciones impuestas a los estudiantes son comunicadas al centro, el cual controla la matrícula en su ámbito.

Se han impuesto medidas cautelares, las cuales intentan proteger a las personas, o al bien jurídico afectado.

No hay amonestaciones públicas. Las privadas se contienen en el cuerpo de la resolución.

No se difunden los procedimientos, salvo al interesado, instructor, denunciante y centro si ha lugar.

Cuestión décimo segunda

No ha habido despidos por causa disciplinaria

Cuestión décimo tercera

Estamento Estudiantes: 1

Cuestión décimo cuarta

En los procedimientos disciplinarios no hay mediación

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con su artículo 38.2.c) y el artículo 8.2.d) del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Presidenta de este organismo es competente para resolver, con carácter potestativo y previo a un eventual recurso contencioso-administrativo, las reclamaciones que se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información.
2. A tenor del artículo 24.6 de la LTAIBG, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene competencia para conocer de las reclamaciones que regula dicho precepto “*salvo en aquellos supuestos en que las Comunidades Autónomas atribuyan dicha competencia a un órgano específico, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta de esta Ley*”. Tal disposición prevé en sus apartados 1 y 2 lo siguiente:



“1. La resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. (...).

2. Las Comunidades Autónomas podrán atribuir la competencia para la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. A tal efecto, deberán celebrar el correspondiente convenio con la Administración General del Estado, en el que se estipulen las condiciones en que la Comunidad sufragará los gastos derivados de esta asunción de competencias”.

En desarrollo de las anteriores previsiones normativas el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Comunidad de Madrid (Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno) suscribieron el pasado 2 de noviembre de 2016 un Convenio para el traslado del ejercicio de la competencia para la resolución de las reclamaciones previstas en el citado artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno -BOE, n. 13, de 16 de enero de 2017- en los supuestos de resoluciones dictadas por aquella Administración Autonómica y por las Entidades Locales incluidas en su ámbito territorial, así como por los entes, organismos y entidades integrados en el sector público autonómico o local.

3. Precisadas las reglas generales sobre competencia orgánica para dictar esta resolución, con carácter preliminar cabe formular una consideración de índole formal que ha sido alegada por la Universidad Autónoma de Madrid. En concreto, se trata de que no consta en el sistema ninguna solicitud registrada por el ahora reclamante por lo que, hechas las comprobaciones oportunas, la Universidad señala que aquél no culminó el proceso de tramitación y registro de la solicitud a través de la sede electrónica, circunstancia que implicaría que no se inició el procedimiento administrativo y, en consecuencia, la reclamación carece de objeto.

En este sentido, cabe advertir que del Informe técnico aportado por la Universidad se desprende que, el ahora reclamante, al llegar a la pantalla correspondiente en la que se le indica que se dispone a firmar la solicitud en la opción “Firmar” -que implica la aceptación plena y sin reservas de su voluntad y consentimiento para la firma de los documentos en ese trámite- abandona en ese momento la tramitación sin que tengan constancia de que pulsara el botón de “Firmar y Tramitar”.

En función de ello, y tomando en consideración que el artículo 115 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas enumera entre los elementos que necesariamente han de contenerse en la presentación del recurso el relativo al “acto que se recurre”, al no haberse iniciado el procedimiento administrativo de ejercicio del derecho de acceso a la información, en los términos de los artículos 17 y siguientes de la



LTAIBG, cabe concluir inadmitiendo la reclamación presentada al no existir acto susceptible de reclamación.

III. RESOLUCIÓN

En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede **INADMITIR** la Reclamación presentada por [REDACTED].

De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

POR SUPLENCIA (RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2017)
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

Francisco Javier Amorós Dorda

